



9 789561 011892

ISBN 956 10 1189 1

Mario Garrido Montt

DERECHO PENAL

PARTE GENERAL TOMO I

Conceptos Generales

Ley Penal. Extradición

Circunstancias Modificadorias
de la Responsabilidad Penal

Las Penas y su Determinación

Causales de Extinción
de la Responsabilidad Penal

Consecuencias Civiles del Delito

Este tomo de la obra *Derecho Penal* y el segundo, que
ha sido publicado con el título específico de *Nociones
generales de la teoría del delito*, comprenden toda la Parte
General del Derecho.

Esta rama del Derecho
ha sido concebida como eficaz complemento de
la, sin perjuicio de la utilidad que sin duda prestará
a los jueces en cuanto ofrece una visión global de los
delitos, a la vez, su profundización a través de las
obras citadas en cada caso y las comprendidas en
esta bibliografía.

El primer tomo se ha dividido en tres partes.

Primera se desarrolla el concepto de derecho penal,
definición del delito, el bien jurídico, la teoría de la pena
penal. En la segunda se exponen las circunstancias
agravantes de la responsabilidad penal; y en la tercera, las
circunstancias jurídicas del delito, las sanciones y medidas
alternativas a la pena, las causales
de la responsabilidad penal y las consecuencias
del delito.

La segunda obra permite en todos sus aspectos
una comprensión global de las diferentes modalidades
de las causas que ofrecen las materias, tanto en sus aspectos
teóricos como prácticos.

DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. TOMO I

Editorial Jurídica de Chile

Editorial Jurídica de Chile

LA PENA Y LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

El Estado tiene facultades para imponer sanciones administrativas como a aquellos que prestan administración (funcionarios públicos). Sanciones graves, como la disolución de una persona o la suspensión del ejercicio de una actividad, una clausura, a veces, y otras análogas.

La facultad de sanción penal administrativa,⁴⁷ es una denominación discutible. El asunto, en sí, no es analizar ese aspecto, sino las diferencias entre la sanción penal, es decir la *pena* propiamente, administrativa. Hacer esta distinción presenta importancia por el art. 20 del C.P., que expresa que no se imponen multas y demás correcciones que los superiores subordinados y administrados en uso de su autoridad o atribuciones gubernativas".

Hacer una aclaración en esta materia, pues coexisten el derecho *contravencional* (las denominadas infracciones administrativas), de la facultad *disciplinaria* administrativa y del derecho *penal*.⁴⁸ El derecho *contravencional* está formado por infracciones normativas de menor gravedad que las administrativas. Su castigo tiene un carácter preventivo. El derecho *penal* es una rama especializada que no tiene en cuenta la sustancia o la gravedad de las infracciones que castiga, sino en cuanto a sus consecuencias para el individuo. De manera que las infracciones administrativas, con los delitos.⁴⁹ No ocurre otro tanto con las *disciplinarias*, que son los medios de la administración para reprimir las infracciones a la normativa y generalmente son ejercidas por el superior administrativo. El derecho *penal administrativo* es otra denominación, paralela al derecho penal, pero

no integrada a éste. Si bien tiene muchos principios análogos a los del derecho penal, posee su propia naturaleza y características; en materia económica en general hay una amplia gama de sanciones impuestas por la administración que persiguen fines preventivos generales y especiales.

Los criterios que se citan como indiciarios en nuestro país para distinguir las infracciones penales de las administrativas, en su amplio sentido, son de dos órdenes: uno considerando la autenticidad que la aplica y el otro atendiendo a la naturaleza misma de la sanción.

Si una autoridad administrativa impuso la sanción, ésta tendría ese carácter; si lo hace una jurisdiccional, sería de índole penal. Solución insatisfactoria de todo punto de vista, pues los tribunales del crimen imponen sanciones de tipo administrativo cuando hacen uso de sus funciones disciplinarias, y viceversa.

La diferencia que se hace incidir en la *identidad* distinta de la pena y de la sanción administrativa, ofrece dos variantes: para una la fuente de esa diferencia radicaría en aspectos *sustanciales* de los hechos a los cuales se aplican; para la otra variante, en algunas de las características particulares de esos hechos. Por ello se habla de criterios *cuantitativos* y *cualitativos*.

El criterio *cualitativo* para distinguir entre pena y sanción administrativa se basa en que la pena administrativa tiene la cualidad de ser apreciada en la sociedad con un menor reproche ético, lo que no sucede con la sanción penal (ser condenado por conducir a exceso de velocidad moralmente es poco trascendente, no así el serlo por delito de robo), y, por otra parte, la sanción administrativa protegería bienes jurídicos que sobrepasan el límite de lo individual (es el caso del tránsito vehicular), en tanto que el delito ampara precisamente bienes que interesan al individuo (el dominio sobre una cosa específica en el hurto, la vida de la víctima en el homicidio). Estos criterios son discutibles; en efecto, carece de verdadera relevancia jurídica la reacción moral que provoca en la sociedad una u otra infracción, y las diferencias que dicen atinencia con la índole del bien jurídico afectado, personal o suprapersonal, no corresponden a la realidad jurídica y resultan arbitrarias: el hombre es uno aislado o en sociedad.

Sólo cuantitativamente puede diferenciarse la infracción administrativa y la penal; la primera tiene un menor injusto que la

1. I, p. 75.

2. Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, pp. 76 y ss. *Manual*, pp. 76 y ss.

LEY PENAL Y SUS FUENTES

naturaleza de ambas es análoga, lo que obligaría a lo posible— a principios limitativos y garantistas que del art. 20 del C.P. nacional se puede colegir que las administrativas y las penales son de la misma naturaleza. Sólo se diferencian por la cantidad del injusto: el mayor. El precepto citado expresa que las sanciones son “no se reputan penas”, pero no desconocería más, anota Cury,⁵⁰ la misma disposición afirman las penas las “restricciones de la libertad de los reos conforme el art. 23 del mismo Código, en relación con el art. 503 del C.P.P., ese tiempo se debe abonar a la pena que son de la misma naturaleza que ésta, y sanciones *cualitativas*.”

Sólo parcialmente esa conclusión. Primeramente la naturaleza de la infracción, pues si es disciplinaria propia identidad y son propias del derecho administrativo cuando se trata de derecho *penal administrativo* se aplica *non bis in idem* si simultáneamente por un mismo hecho se impusieran una sanción administrativa y una sanción disciplinaria, en lo posible deberían quedar sujetas al principio de la sanción única.⁵¹ Sin perjuicio de lo señalado, las sanciones disciplinarias, en virtud de la facultad *disciplinaria*, cuyo objetivo es el orden interno y la estructura jerárquica de la administración, son diferentes a las sanciones penales y escapan a las sanciones disciplinarias; simplemente son derecho administrativo, finalidad distinta: su cometido es mantener una organización capaz de funcionar, mientras que el derecho disciplinario debe hacer posible la vida social.⁵² De modo que la reacción administrativa, pueden ser objeto de la sanción disciplinaria (la distracción de dinero en un servicio público) o de la sanción penal (la distracción de dinero en un servicio público) o de la sanción disciplinaria y, al mismo tiempo, a sanciones disciplinarias y, al mismo tiempo, a sanciones penales.

t. I, p. 77.

t. I, p. 79.

t. I, p. 35.

t. I, p. 73.

6. FUENTES DEL DERECHO PENAL. LA LEY PENAL

I. FUENTES DEL DERECHO PENAL

Se reconoce la existencia de dos fuentes del derecho penal: fuentes *inmediatas* (directas) y *mediatas* (indirectas).

El derecho penal, en cuanto a su creación, cuenta con distintas fuentes, sin perjuicio de que entre ellas pueda existir cierta jerarquía. En la actualidad, y quizá en el futuro con mayor intensidad, la tendencia a reconocer la posibilidad de que el derecho penal cuente con fuentes múltiples de creación, se tiene que ir desarrollando como una necesidad del sistema jurídico.

Se acepta mayoritariamente que la ley es la fuente directa única del derecho penal. Como fuentes indirectas se señalan la costumbre, la analogía en favor del procesado; podría mencionarse también entre éstas a la jurisprudencia, pero sobre este punto hay cierta unanimidad en considerarla sólo como un complemento del ordenamiento jurídico,¹ en la misma forma que lo es la doctrina. En nuestro país esta opinión encuentra categórico respaldo en lo preceptuado por el art. 3º inc. 2º del C.C.

La circunstancia de que se califique a la ley como la fuente directa y única del derecho penal se fundamenta en el principio

¹ Sáinz Cantero, *Lecciones*, t. II, p. 92.